

La revolución democrática pendiente^{*}

Hugo Torres Jiménez^{**}

Resumen: Ensayo sobre la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua: sus causas, sus objetivos, los detonantes de su derrota y las características del actual gobierno que preside Daniel Ortega. Reflexiones históricas y políticas a 30 años del triunfo de la Revolución.

Palabras clave: Dictadura; Revolución; Democracia; Derechos civiles; Derechos humanos; pueblo; Nicaragua



Hace treinta años, el 19 de Julio de 1979, el pueblo de Nicaragua insurreccionado, alcanzó el triunfo sobre una tiranía dinástica –la de la familia Somoza- que ya duraba 45 años en el poder.

La dictadura somocista articulaba varias formas de acción política que le permitían tener un absoluto control sobre la vida de la ciudadanía. Contaba con un aparato militar que servía básicamente a sus intereses y designios, la Guardia Nacional de Nicaragua, que era Policía y Ejército al mismo tiempo y que tenía una política represiva implacable contra toda demostración de disidencia política, que muy fácilmente era identificada por el régimen como parte de una campaña del comunismo internacional contra los valores y sistemas democráticos.

La dictadura desarrolló y se apoderó de un aparato partidario, el Partido Liberal Nacionalista, a través del cual construyó un amplio sistema de lealtades, castigos, premios y recompensas que garantizaba el fiel cumplimiento de las decisiones verticales de la familia gobernante en todos los planos de la vida social.

^{*} Ponencia presentada por el autor en el simposio organizado por La Universidad Libre de Berlín, en conmemoración del 30 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

^{**} General de Brigada en retiro del Ejército de Nicaragua; Miembro de la Directiva Nacional del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); Diputado (s) del MRS ante la Asamblea Nacional.

Llevó a cabo políticas públicas populistas que le permitieron fundar y desarrollar un extenso clientelismo político y una dinámica social de corrupción, sembrando de esta forma, en el imaginario social, un sistema de valores corrupto, individualista, ventajista y oportunista, de obediencia ciega y sumisión a la autoridad.

El somocismo estableció una política de alianzas con la complicidad del Partido Conservador Nicaragüense y de poderosos sectores del capital comercial agro exportador y del capital financiero, que le permitió articular un sistema institucional orientado al lucro privado de la familia gobernante y sus aliados políticos y económicos, a través del que reducidos grupos aprovecharon las mejores oportunidades de negocios.

Cuando el pueblo se insurreccionó contra esa dictadura, reivindicó el establecimiento de espacios democráticos en todos los órdenes de la vida social y un nuevo modelo de desarrollo económico y social de beneficio para todos los ciudadanos.

El derrumbe estrepitoso de esa dictadura le abrió paso a la posibilidad de instalación de un nuevo régimen que, calificado por sus propugnadores de revolucionario, pretendía cambiar profundamente el sistema político, económico y social imperante, de tal manera que una realidad diametral y positivamente distinta se hiciera presente y permaneciera en el tiempo como una sólida institución política revolucionaria; realidad que debería traer consigo a la libertad y la igualdad como valores supremos, y junto a ellos, como expresión política a desarrollar por el nuevo Estado, al privilegio de lo público sobre lo privado y a la justicia social como uno de sus estandartes; es decir, una sólida democracia con justicia social, como nunca antes habían conocido los nicaragüenses.

El movimiento revolucionario, encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de aquella época, logró desarrollar, en los dos últimos años de esa gesta libertaria, una hábil política de alianzas de todos los sectores y corrientes políticas, sociales y gremiales, como una necesaria tarea para aislar al dictador y acelerar de esa forma su caída. Igual tarea desarrolló en la arena internacional con magníficos resultados para la causa de la liberación. La plataforma programática sobre la que se fundaron estos esfuerzos tenía tres pilares fundamentales sobre los que se construiría el nuevo régimen: a) El pluralismo político; b) El no alineamiento con las potencias hegemónicas de entonces, que lideraban los bloques capitalistas y socialistas y, c) La economía mixta; es decir, la convivencia entre la propiedad estatal, la privada y una mixtura de ambas. La primera expresión concreta de gobierno que reflejaba dicha política de alianzas fue la constitución de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros, representativos de distintos sectores políticos y empresariales del país.

Para estructurar el nuevo Estado y para levantar la economía del país, el Gobierno Revolucionario contó con un amplio apoyo de la comunidad internacional, de muchos pueblos, organizaciones políticas, religiosas, gremiales y personalidades del mundo y, por supuesto, de los países socialistas, encabezados por Cuba y la Unión Soviética. En

los propios Estados Unidos de América la revolución nicaragüense era vista con simpatía por personalidades e importantes sectores de la población norteamericana. Era, por decirlo de alguna manera, una revolución atípica ya que, a pesar de haber triunfado por la vía de la lucha armada, tenía planteamientos programáticos amplios e inclusivos. Si nos atenemos a lo anterior era de suponer, entonces, que el nuevo modelo de régimen político se debería caracterizar por un papel más activo del Estado en procura de la salvaguarda de los intereses de las mayorías, garantizando las plenas libertades ciudadanas y el más irrestricto respeto a los derechos humanos; es decir, la negación de todo lo que había significado la dictadura somocista. Lo ocurrido después del triunfo desdice en gran medida lo anterior.

Cuatro fueron los factores principales que influyeron decisivamente en la derrota del proyecto revolucionario:

- 1) La falta de una clara definición de las reglas del juego político, lo que llevó a la dirigencia revolucionaria a creer que la revolución, por sí misma, era fuente de derecho, y por lo tanto a no considerar necesaria la búsqueda de consenso nacional para la implementación del programa y políticas de gobierno y de Estado y para el establecimiento de una sólida institucionalidad democrática, incluyendo en esa búsqueda a los sectores de tendencias no revolucionarias, como los conservadores, social cristianos y hasta sectores liberales no comprometidos con el anterior régimen. Esto dio lugar a que se alimentaran viejas contradicciones con sectores más atrasados o conservadores y a que nacieran otras con sectores afines o aliados del movimiento revolucionario; sobre todo en las zonas rurales y montañosas del país.
- 2) La confusión Estado – Partido (FSLN) – Ejército (Popular Sandinista) que terminó por subordinar a las instituciones del Estado y al Ejército a los intereses y políticas emanadas desde la conducción del FSLN, ligando la suerte de ambas a las del partido en el poder. Esto significaba la negación del régimen democrático y su sustitución por uno que imponía, al resto de la sociedad no sandinista, nuevas reglas del juego político y económico no consensadas con anterioridad, que la dejaban en clara desventaja para competir por el poder político, a través de todas las organizaciones partidarias, y para ejercer el resto de sus derechos ciudadanos.
- 3) El ascenso de Ronald Reagan a la Presidencia de Los Estados Unidos de Norte América, el cual desarrolló una política sumamente agresiva contra la Revolución, por considerar que ésta representaba un serio peligro para los intereses geoestratégicos y geopolíticos de su país, al estar enclavada la misma en territorio continental, en el centro de América, y muy cerca de sus fronteras físicas; además, por considerarla como la punta de lanza de la URSS en Centro América y por el riesgo de influencia e irradiación hacia sus vecinos.

La confrontación militar provocó distorsiones de todo tipo. Las medidas de democratización social que se impulsaron en la tenencia de la tierra, el acceso a bienes básicos de consumo para toda la población, en la Educación – que había comenzado con una formidable campaña nacional de alfabetización- en la Salud, en infraestructura social y económica, se vieron severamente limitados por las prioridades de la guerra, por la confrontación entre las familias nicaragüenses, por la falta de experiencia en la administración pública, por esquemas ideológicos excesivamente mecánicos y muchas veces mal copiados de otras experiencias, acerca de cómo organizar y ejercer el poder político, que llevaron a cometer errores y abusos contra los intereses y la cultura de comportamiento de distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

El conflicto militar actuó en contra de la voluntad democratizadora original de la revolución y estimuló al liderazgo sandinista a centralizar más el poder en todos los órdenes de la vida del país. Fuertes ribetes de autoritarismo y control de la vida social se hicieron presentes, afectando negativamente a amplios sectores de la población. En gran medida los revolucionarios nicaragüenses no logramos democratizar esencialmente la realidad del país, ni transformar en lo fundamental la cultura política, el estado de empobrecimiento y otras lacras políticas, económicas y sociales existentes antes de 1979.

El drama y el desgaste cotidiano, causados por el conflicto militar, agotaron ese modelo adoptado y la mayor parte de la población terminó por derrotar en las urnas, en 1990, la forma en que se había organizado y llevado a cabo la revolución sandinista, en un contexto de guerra civil estimulado por una potencia extranjera.

Sin lugar a dudas, el costo mayor del conflicto militar fue la pérdida de decenas de miles de vidas de los ciudadanos contendientes y de parte importante de la población civil.

4) La identificación con la revolución socialista soviética, europea y cubana, aunque tal identidad fuera más política que ideológica, ya que la revolución sandinista se aproximaba más a una revolución liberal socialista que a una típica del socialismo científico. Esta comunión de intereses políticos se tradujo en una cuantiosa cooperación de los países que conformaban el campo socialista hacia Nicaragua, sobre todo en el campo militar, en la entrega de petróleo e implementos para la agricultura y, en el caso de la cooperación cubana en el campo de la educación, el deporte y la salud.

En 1990 – coincidentemente con el derrumbe del socialismo soviético y del resto de países de Europa – con la población cansada y sufrida y con la economía destruida, el FSLN – y con él su proyecto revolucionario – fue vencido en las urnas electorales; estaban pendientes de ser sacadas las lecciones de la historia. El FSLN quedaba frente al reto de sobrevivir a la debacle, pasando al campo de la oposición como un partido que

debía competir por volver a la Presidencia de la República a través de los votos; además, la nueva realidad nacional e internacional le exigían de forma urgente la necesaria reformulación de sus planteamientos ideológicos y de su programa político, lo mismo que su reestructuración orgánica. El anhelo del pueblo de Nicaragua seguía siendo el mismo que venía persiguiendo desde su independencia de España en 1821: ser una verdadera República con un régimen democrático verdadero.

En Noviembre de 2006 y después de varios años de haber pactado con Arnoldo Alemán – líder del liberalismo condenado a veinte años de prisión por lavado de dinero y actos de corrupción, cometidos mientras ejercía el cargo de Presidente de la República – Daniel Ortega volvió a la Presidencia del país ganando las elecciones con el 38% de los votos emitidos. La historia le ofrecía una nueva oportunidad para demostrar, ahora con el país en paz y con las mejores condiciones de estabilidad macroeconómica y política y con flujos importantes de cooperación internacional, que el FSLN era la mejor opción para empujar a Nicaragua hacia un derrotero de progreso en el marco de una estable democracia, con clara institucionalidad y plenas libertades. Era la oportunidad para ubicar al ser humano, en su carácter de ciudadano, como el centro de sus intereses fundamentales. La vida nos ha demostrado, en estos dos años y medio de su gobierno, que el Presidente Ortega no sólo está lejos de esos nobles y justos propósitos, sino que es la antítesis de los mismos.

Antes del regreso al poder del Presidente Ortega, Nicaragua vivió un cambio de modelo, que en lo esencial tampoco logró democratizar las relaciones sociales. Es cierto que se lograron avances relevantes en la pacificación del país, en el respeto a la institucionalidad del Ejército de Nicaragua – antes Ejército Popular Sandinista – y de la Policía Nacional – antes Policía Sandinista – lo mismo que en la recuperación económica y en un respeto aceptable, aunque no suficiente, de la profesionalización de las carreras judicial, diplomática y de otras instituciones del Estado. Funcionaban, con un relativo grado de aceptación e independencia los tribunales de justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y resto de órganos del Estado. Todo eso – con excepción, hasta hoy, del Ejército y en menor medida de la Policía – se ha venido perdiendo aceleradamente como consecuencia del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.

También se lograron avances, en ese período, en el campo de la libertad de expresión y de prensa, armas fundamentales del régimen democrático, y en la recuperación económica del país, lográndose alcanzar la estabilidad macroeconómica tan necesaria para pensar en tareas del desarrollo. El gran problema de esa política económica – la cual se sigue reproduciendo por el actual gobierno – es que, siguiendo los patrones diseñados por el Consenso de Washington, dio preponderancia absoluta al mercado en detrimento del necesario rol del Estado, relegando a un segundo plano las políticas sociales, la defensa de los recursos naturales y la política exterior independiente del país.

Desde 1990 hasta hoy, todo el esquema político institucional y económico ha sido moldeado en la puja de contradicciones entre los mismos grupos económicos tradicionales, más la participación de los nuevos grupos encabezados por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, cuyos capitales han venido siendo amasados desde el poder y a través de tráfico de influencia y de la corrupción más galopante.

Las formas oligopólicas y monopólicas han aparecido en muchos campos dejando por un lado las más genuinas aspiraciones de la población, que todavía espera una verdadera democratización de oportunidades, una verdadera democratización del poder público y una estabilidad económica y social que le ofrezca reales condiciones para mejorar su vida.

Hoy por hoy, en Nicaragua, el régimen de libertades individuales y colectivas está reducido a su mínima expresión por causa de la voluntad autoritaria y con clara vocación dictatorial de Daniel Ortega, su esposa y el grupo en el poder. Desde que llegó a la Presidencia de la República, Ortega ha venido impulsando una política que niega la libertad, la justicia social y el privilegio de lo público sobre lo privado; es decir, una política que tiende a instaurar una nueva dictadura, con un gobierno que se dice de izquierda y actúa en contra de los intereses económicos, políticos y sociales de la población; peor aún, un gobierno que tiene, en su Presidente, el perfil en desuso del típico caudillo fascista, en este caso tropicalizado.

Con el gobierno del Presidente Ortega están en serio peligro los derechos civiles y los derechos humanos de todos los nicaragüenses, los de quienes le adversan – que son la mayoría – y muchos de los que le apoyan, algunos por ciego fanatismo y otros por adhesión a un partido que creen que es el mismo que hizo la revolución, sin percatarse que aquel fue desnaturalizado, confiscado, privatizado y puesto al servicio de Daniel Ortega y su familia. Emulando, con las mejores calificaciones, al régimen dictatorial somocista.

El Estado de Derecho ha venido siendo reducido a añicos, bajo el concepto de que es el Estado de Derecho de la oligarquía; los Poderes del Estado han perdido su independencia, encontrándose hoy, en la práctica, claramente subordinados al Presidente Ortega; por esta causa, no hay igualdad ante la ley para todos. La justicia está privatizada por el Presidente. Se esgrime la ley por parte de los personeros del gobierno para tratar de darle visos de legitimidad a sus acusaciones arbitrarias en contra de políticos adversarios, intelectuales y cantautores de izquierda, periodistas y dueños de medios de comunicación independientes, dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres y de organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones de jóvenes y Jerarquía de la Iglesia Católica, por el sólo hecho de ser, todos, críticos de la actuación abusiva del gobierno.

Nicaragua es, bajo el régimen de Ortega, el único país de América signatario de la Carta Democrática Interamericana, que se ha quedado sin futuro electoral democrático. El

actual Consejo Supremo Electoral (CSE) es una de las instituciones más corruptas del Estado. Es el instrumento a través del cual se ha realizado el fraude electoral más extraordinario y más documentado de la historia reciente en el mundo, en las elecciones municipales de Noviembre de 2008. A través del CSE el FSLN se robó cientos de miles de votos ciudadanos y más de 40 alcaldías del país incluidas las de la capital, Managua, y otras cabeceras departamentales, como León, Masaya, Juigalpa y Jinotega, sólo para mencionar algunas.

El carácter laico del Estado, uno de los componentes fundamentales del Estado moderno ha sido puesto de lado por el Presidente Ortega y su gobierno; estamos en presencia de un gobierno confesional y un mandatario marcadamente mesiánico; un mesianismo que vende la imagen de un presidente emisario de Dios y por lo tanto infalible, magnánimo y poderoso. Toda la propaganda del gobierno está impregnada de mensajes religiosos, en una clara manipulación de la fe de millones de ciudadanos: “La voz del pueblo es la voz de Dios”, es un lema que acompañado de los retratos gigantes del Presidente, busca establecer en el inconsciente colectivo, la asociación entre Dios y Daniel Ortega y su familia. De igual factura es el resto de la propaganda gubernamental.

La presión y el chantaje políticos son instrumentos privilegiados por el régimen para atemorizar a potenciales y claros adversarios, buscando con los mismos inmovilizarlos, golpearlos, esquilmarlos y despojarlos de sus derechos constitucionales, y muchas veces de bienes y propiedades.

El miedo, viejo recurso psicológico usado por las dictaduras de antaño para impedir las protestas y rebeliones de la población contra los desmanes y abusos cometidos por aquellas, está siendo desarrollado por el régimen de Ortega, utilizando a las instituciones del Estado como La Fiscalía General de la República, la Dirección General de Ingresos, La Dirección General de Aduanas y, preponderantemente, a jueces y magistrados del Poder Judicial, y fuerzas de choque armadas, entre otros, como verdugos listos a dejar caer la guillotina sobre los que osen desafiar al poder del Presidente y su propósito de permanecer en la Presidencia, más allá de su período, a través de prácticas reñidas con la ley. Todo eso sin tener una Guardia Nacional, como la de los Somoza: ¡el alumno está superando al maestro!

El pueblo de Nicaragua está hoy como al principio: luchando por establecer la revolución democrática que tanto anhela; es decir, lograr la apertura y democratización del sistema político y la afirmación de los derechos ciudadanos, en el marco del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución Política de la República. Este pueblo, tan explotado, abusado y martirizado la necesita con urgencia para tener seguridad de un futuro plétórico de desarrollo con libertad; bien merecido lo tiene.